



Disputas y tensiones en la construcción de la verdad jurídica: las distintas versiones construidas alrededor de tres casos de violencia policial¹

Nicolás Barrera*
Ma. Laura Bianciotto**
Marta Fernández y Patallo***

Resumen

A partir del trabajo con una fuente judicial -el *expediente*-, en este artículo nos proponemos analizar diferentes lógicas, saberes y dinámicas burocráticas que van construyendo y expresando distintas versiones en un caso judicial. Particularmente, nos interesa acceder a las lógicas de construcción de la verdad jurídica y a las disputas que se dieron en torno a ella entre diferentes agentes estatales y no estatales -policías, funcionarios judiciales, abogados y víctimas- a partir de tres casos de utilización letal de la fuerza por parte de funcionarios de la Policía provincial de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario. Este análisis permitirá señalar cómo, obedeciendo al marco de relaciones en que se encuentran y posicionan determinados agentes, las resoluciones judiciales pueden tomar caminos diferentes que el delineado inicialmente por la versión policial.

Palabras Claves

versiones - verdad jurídica - violencia policial

Abstract

¹ Una versión preliminar de este artículo fue presentada en VII Congreso Internacional de Antropología Jurídica organizado por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica en la ciudad de Lima entre los días 2 y 6 de Agosto de 2010.

* Licenciado en Antropología -UNR. E-mail: nicbarrera@hotmail.com.

** Dra. en Humanidades y Artes- Mención Antropología -UNR. E-mail: laurabianciotto@gmail.com

*** PPGA/UFF, Becaria CAPES, Pesquisadora INEAC-UFF, Brasil, E-mail: patallofmarta@gmail.com

Barrera, Nicolás; Bianciotto, María Laura y Fernandez y Patallo, Marta (2012) "Disputas y tensiones en la construcción de la verdad jurídica: las distintas versiones construidas alrededor de tres casos de violencia policial", *Claroescuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural* 11: pp. 175-190.

Recibido: 12 de septiembre de 2012 *Aceptado:* 28 de Diciembre de 2012.

From the research with a legal source -the record of a case-, in this paper we suggest analyze different logics, knowledges and bureaucratic dynamics that going to form different versions in a judicial process. Especially we pretend to access to the logics of construction of the legal true and the conflicts about this configuration between government and not government agents - police officers; court officers; lawyers and victims - from three cases of lethal use to the force of law from police officers to Santa Fe Police, specifically in Rosario city. This analyze makes it possible to point out how in front of the influence to certain agents, the court decision could take different ways that the initial police version.

Key Words

Versions - judicial true - police violence

Presentación

En este artículo nos proponemos analizar las distintas versiones de un “caso judicial”, en busca de constituirse en una *verdad jurídica*². En este sentido, nos interesa acceder a las lógicas de construcción de la *verdad jurídica* y a las disputas que se dieron en torno a ella entre diferentes agentes estatales y no estatales- policías, funcionarios judiciales, abogados y víctimas- a partir de tres casos de utilización letal de la fuerza por parte de la policía provincial de Santa Fe en la ciudad de Rosario.

En particular, en este trabajo pretendemos dar cuenta de estas disputas partiendo de considerar cómo es elaborada la *versión policial* de los hechos en casos que culminan con la muerte de la víctima. Dicha construcción, al menos en los tres casos analizados, inicia una trayectoria que puede asumir caminos diferenciales, cuyo recorrido no solamente es influenciado por el desarrollo de la investigación judicial sino también por la acción de los familiares de las víctimas.

A partir de la observación de cada uno de los casos pondremos en discusión las formas en que la *versión policial* es o puede ser consolidada en tanto *versión* en tránsito a constituirse en *verdad jurídica*.

En este sentido, nuestra hipótesis sugiere que cuando se produce una intervención activa de familiares de las víctimas se genera un escenario donde puede llegar a producirse un quiebre de la lógica lineal que suele estructurar las investigaciones judiciales.

² FOUCAULT, Michel (2003) *La verdad y las formas jurídicas*, Editorial Gedisa, Bs. As.

A tal fin, nos detendremos en el análisis de un caso donde familiares y amigos de la víctima despliegan una serie de estrategias que buscan problematizar la versión del hecho construida por la policía.

Ciertamente este planteo no resulta aislado. En los últimos 15 años distintas investigaciones, procedentes tanto del campo del activismo en derechos humanos como del ámbito académico, han abonado a este enfoque.

Particularmente los informes del CELS³ advierten la relevancia que tiene la presencia activa de familiares y víctimas en los procesos judiciales dado que muchas veces la actuación judicial resulta obstructiva a la investigación y por ende funcional a las versiones policiales. De allí entonces que la intervención de familiares para recopilar información, presentar testimonios, exigir peritajes, entre otras acciones contribuya para “desmontar las explicaciones de los funcionarios policiales”⁴.

En la misma línea se inscriben planteos provenientes del campo académico. Tal es el caso de la investigación desarrollada por Sofía Tiscornia⁵ en torno a la muerte de Walter Bulacio. En dicho texto la autora, examina los complejos caminos que un caso judicial puede atravesar, sobre todo cuando en él se están discutiendo los “umbrales” del poder violento de la policía. Su enfoque trasciende el análisis normativo y toma en consideración también los movimientos sociales que cuestionan la articulación entre la policía y el poder judicial. Se trata de movimientos sociales que se constituyen como un actor político y que hacen visible ese poder, con lo cual la mera discusión jurídica pasa a desdibujarse y el conflicto es planteado en otro nivel. De este modo, la autora da forma a la tesis de su trabajo que plantea que en determinadas circunstancias histórico políticas el activismo en derechos humanos tiene posibilidades de limitar el poder de policía a través de estrategias tanto políticas como jurídicas.

Profundizando el análisis de este tipo de intervenciones en los llamados casos de “gatillo fácil”, María Pita⁶ ha estudiado cómo las acciones colectivas de los familiares se constituyen en formas particulares de intervención política, trascendiendo así la esfera judicial.

En el contexto de la ciudad de Rosario, Fernández y Patallo⁷ aborda el proceso de demanda de justicia de familiares de víctimas de violencia policial, analizando particularmente cómo las prácticas de los

³ El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja desde fines de la década del 70 en la promoción y protección de los derechos humanos en Argentina. Desde 1997 publica anualmente informes relativos a la situación de los derechos humanos en el país.

⁴ CELS (2009) *Derechos Humanos en Argentina: Informe 2009*. Ed. Siglo XXI, Bs.As., Pág. 123

⁵ TISCORNIA, Sofía (2008) *Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales: el caso Walter Bulacio*. Ed. Del Puerto. Bs As.

⁶ PITA, María Victoria V (2010) *Formas de morir y formas de vivir: el activismo contra la violencia policial*. Editores del puerto y CELS, Buenos Aires.

⁷ FERNANDEZ Y PATALLO, Marta (2008) *Familiares, jueces y policías en la ciudad de Rosario. Análisis del proceso de demanda de justicia de familiares de víctimas de violencia policial*. Tesis de Licenciatura en Antropología, 2008. Universidad Nacional de Rosario, (mimeo); FERNANDEZ Y PATALLO, Marta (2009) “Um fato, algumas verdades”. Análise da produção de verdade judicial no caso Carlos Gauna”. Ponencia presentada en la RAM 2009, UBA, Bs As.

familiares del joven Carlos Gauna y la relación de éstas con la investigación policial/judicial, incidieron en la construcción de la verdad judicial. A partir del trabajo de campo realizado da cuenta de cómo a lo largo de la investigación judicial las diferentes estrategias adoptadas por familiares en el espacio público, la construcción de una red de relaciones con organizaciones sociales y políticas, hicieron posible instalar su propia versión de lo ocurrido.

Buscando aportar a esta línea de trabajo, nos basaremos en el análisis de expedientes judiciales de casos de violencia policial ocurridos en la ciudad de Rosario y en nuestra experiencia de trabajo de campo tanto en comisarías de la ciudad como en el Comando Radioeléctrico⁸, ambos dependientes de la Unidad Regional II de la policía de la provincia Santa Fe.⁹

En este abordaje, el expediente judicial se nos presenta como la expresión material de las formas particulares en que el sistema penal administra conflictos. Podría suponerse inicialmente que el expediente sintetiza y evidencia distintas versiones de un mismo hecho. Sin embargo, como intentaremos demostrar a lo largo del trabajo, la construcción de la *verdad jurídica* en el proceso judicial presupone ratificaciones o divergencias diferenciales con respecto a las distintas versiones que son presentadas sobre los hechos en cuestión.

La construcción de la versión policial: el acta de procedimiento

En su rol de *auxiliares de la Justicia*, y en el marco de sus atribuciones, los funcionarios policiales construyen una primera versión de lo sucedido, la cual es plasmada en un documento público: el “acta de procedimiento”. En este documento se deja asentado fecha, hora y lugar en que se sucedieron “los hechos”; personas involucradas y fundamentalmente cuál ha sido y de qué modo, la intervención policial.

La elaboración de este documento se realiza en todos los casos que llegan a la órbita policial, abarcando desde una discusión entre vecinos, un asalto o robo hasta inclusive aquellos casos que involucran al personal de la propia fuerza.

La descripción de las formas que asume la elaboración del “acta” en tres casos posibilita identificar diferentes patrones de argumentación policial acerca del propio accionar, los cuales expresan una particular forma de construcción de las *versiones policiales*:

⁸ El comando Radioeléctrico forma parte –junto a la división Infantería y Motorizada– de la agrupación *Cuerpos* que contempla al personal “de calle”, mientras que las comisarías, en tanto unidades administrativas distribuidas geográficamente en jurisdicciones, forman parte de la división *Orden Público*.

⁹ Fueron elaboradas a partir de ese trabajo de campo la tesis doctoral de BIANCIOTTO María Laura (2012) *Práctica profesional en la policía de Santa Fe: Abordaje de sus interrelaciones y atravesamientos en dependencias de la ciudad de Rosario*, UNR, mimeo. BARRERA, Nicolás (en elaboración) *Territorio, alteridad y ciudadanía: una etnografía de las prácticas policiales*; FERNANDEZ Y PATALLO, Marta (2008) *Op. Cit.*

En el primer caso¹⁰, de acuerdo al “acta de procedimiento”, un móvil del Comando recibió una comunicación radial mediante la cual el operador de turno de la central operativa “lo comisionó”- es decir, le ordenó que se dirija- hacia la zona sur de la ciudad, debido a que un llamado telefónico había alertado que en el lugar se encontraría una persona herida de arma de fuego. Una vez allí, el personal policial se encontró con un hombre y una mujer, ambos heridos, que manifestaron haber sido agredidos por otras dos personas, también un hombre y una mujer, supuestamente armados. Una de las víctimas pudo reconocer al agresor y con los datos aportados, el oficial actuante organizó el procedimiento policial dirigiéndose a las inmediaciones en busca de los supuestos agresores. Más tarde, arribaron otras dos dotaciones¹¹ a una “zona de pasillos”¹² ubicada en las proximidades. Al bajar de las unidades, los policías manifestaron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego provenientes del asentamiento precario ubicado en el lugar. El oficial que firmó el “acta” manifestó en su declaración que realizó un recorrido a través de los pasillos, quedando un solo agente al cuidado de los móviles. En esos instantes, este oficial observó que tres personas se daban a la fuga, por lo que impartió “la voz de alto”, aunque las mismas hicieron caso omiso y continuaron escapando. Al lograr acercarse, el oficial observó que los sujetos aminoraron su marcha y que uno de ellos se recostó sobre una pared “esgrimiendo” un arma de fuego, razón por la cual el oficial sacó su arma reglamentaria y realizó un disparo al suelo buscando un “efecto disuasivo”. En esas circunstancias los sujetos lo agredieron con disparos de armas de fuego que obligaron al oficial a “repeler la agresión”, efectuando disparos hacia estas personas, cayendo uno de los agresores al piso y los otros dos dándose a la fuga. Según sus declaraciones que constan en este documento, el oficial se abocó a la “asistencia de la persona caída”, registrando sus heridas. Asimismo, con posterioridad, una vecina del lugar informó que en su patio apareció un arma de fuego y que luego en el rastrillaje los policías encontraron vainas servidas calibres 9 y 22 milímetros. Por último, se resaltó en el acta que los “efectos secuestrados” no pudieron ser ratificados por testigos por una supuesta hostilidad de los habitantes de “la villa de emergencia” para con la policía.

Una vez que el “acta” es concluida, el siguiente paso burocrático que corresponde cumplir a la policía consiste en la elaboración de un “parte preventivo”¹³. En este caso, dicho documento, realizado posteriormente en la dependencia policial por el sumariante y el subcomisario, expresó exactamente

¹⁰ Todos los nombres han sido suprimidos para respetar el anonimato.

¹¹ Se denomina “dotaciones” a la pareja de policías que cumplen funciones de patrullaje a bordo de unidades móviles o patrulleros. Cada una de las dotaciones cuenta con un “chofer responsable” y un “refuerzo”. El primero, siempre con mayor trayectoria dentro del Comando Radioeléctrico, está a cargo del móvil policial para su manejo y cuidado; mientras que el segundo, con menos antigüedad, asiste, en lo formal, a su compañero y sigue sus directivas.

¹² Corredores internos de las urbanizaciones del tipo “villa miseria”.

¹³ Documento realizado con posterioridad en la dependencia policial para ser elevado al juzgado correspondiente a fin de informar al juez sobre lo sucedido.

los mismos contenidos que el “acta de procedimiento” antes mencionada. De esta forma, podemos observar cómo en los distintos momentos preliminares de la investigación policial es sostenida una versión unívoca, aquella que repetidamente es plasmada en el “acta” – que inicialmente es portavoz de la versión policial – y el “parte”, a partir del cual se inicia la investigación en la dependencia policial y que a su vez será comunicado al juzgado.

Este primer paso, de identidad entre “acta” y “parte”, se caracteriza por una ratificación expresa y textual en el “parte” de la versión elaborada por aquellos policías que participan del operativo y que es inscrita en el “acta”. Esto puede pensarse como un primer basamento que posteriormente dará sustento a los intentos de transformación de la *versión policial* en una *verdad jurídica*.

Foucault hablará de una *verdad jurídica* para referirse a aquellas prácticas sociales que fundan un saber, un modo de conocer, un sujeto de conocimiento y con ello una determinada subjetividad. Esta *verdad* no se vincula con aquella proveniente de la historia de las ciencias (historia interna de la verdad) sino que se forma en otros ámbitos/espacios sociales “donde se definen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto, tipos de saber y por consiguiente, podemos hacer a partir de ello una historia externa, exterior, de la verdad”¹⁴.

Ciertamente lo que este concepto pone de relieve es su construcción –y con ello hablamos de arbitrariedad e historicidad– a partir de ciertos mecanismos, prácticas y lenguajes; esto es la construcción de *verdad jurídica* a través de ciertos dispositivos más o menos sistemáticos, como en este caso los representados por las versiones que brinda la policía sobre un determinado hecho.

Continuemos con el segundo caso. Según el “acta”, la central operativa del Comando envió dos unidades de patrullaje a un barrio de la zona oeste de Rosario motivado por un llamado que hizo el vigilante de una escuela de la zona que manifestó haber visto a seis hombres en tres motos, armados y efectuando disparos. En el trayecto, uno de estos móviles se topó con una persona que dijo estar herida a raíz de haber sido agredida por tres hombres que se transportaban en dos motos. Mientras tanto, la otra unidad solicitó apoyo por radio por encontrarse en “enfrentamiento armado con dos masculinos” que se trasladaban a bordo de una moto. Producto de este enfrentamiento resultó herido un funcionario policial y los dos delincuentes fueron muertos. Según el “acta”, el “enfrentamiento” se habría iniciado cuando el personal policial al ver que las características de quienes se trasladaban en el rodado coincidían con la de los sospechosos, les indicó que detengan su marcha para su “identificación”. Estos, ante esta situación imprimieron mayor velocidad al vehículo para “darse a la fuga”. De acuerdo a la versión policial ambos hombres “esgrimieron entre sus ropas armas de fuego” con las cuales apuntaban hacia el personal policial uniformado realizando gran cantidad de disparos

¹⁴ FOUCAULT, Michael (2003) *Op.Cit.* 4.

hacia los mismos. Es en esas circunstancias que los policías “repelieron la agresión” utilizando sus armas reglamentarias y cayendo los dos “masculinos” de la moto, uno ya muerto (con su arma encontrada a un lado) y el otro dándose a la fuga. Este último, al parecer, cubrió su huída con disparos y mantuvo un nuevo enfrentamiento con policías de otras dos unidades, siendo herido luego de lesionar a un suboficial. Posteriormente, falleció en el Hospital de Emergencias con 16 impactos de armas de fuego en su cuerpo.

Tal como ocurrió en el primer caso descrito, pudo observarse también una uniformidad narrativa que atravesó el “acta de procedimiento” y el “parte preventivo”. En este caso, el “acta” fue confeccionada por el Jefe del Tercio del Comando Radioeléctrico¹⁵ y avalado con la firma de todos los miembros de esa división que participaron del procedimiento policial, mientras que el “parte”, fue confeccionado por el sumariante y comisario de la jurisdicción donde ocurrió el hecho.

Por último, en el “acta policial” del tercer caso, los funcionarios policiales construyeron la siguiente versión. A partir de la activación de una alarma en un domicilio particular situado también en zona oeste, el Comando Radioeléctrico recibió una comunicación radial y un móvil con dos oficiales acudió inmediatamente. El dueño de la casa dijo a los policías que vio a “masculinos” entrar en el terreno baldío lindero a su patio, motivo por lo cual uno de los oficiales ingresó al fondo de la casa con el objetivo de divisarlos. El propietario colocó una escalera y la sostuvo para que el policía subiera al muro. En ese momento el oficial asomó la cabeza y fue “agredido con una arma de fuego desde el interior del descampado” frente a lo cual la policía tuvo una “rápida reacción de repeler la agresión con disparo de arma de fuego”. Inmediatamente observó que algunas personas salían del terreno lindero y bajando de la escalera se dirigió hacia afuera de la casa. Allí él y su compañero dieron la “voz de alto”, pero los “masculinos” hicieron caso omiso. Sin embargo, uno de ellos se detuvo y pudo ser arrestado. Luego de estos hechos acudieron al lugar miembros de la comisaría de la zona; quienes procedieron a realizar un rastillaje por las cercanías “en procura de los otros masculinos con resultado negativo”. A continuación, recibieron una comunicación radial en la que se informaba que existiría un hombre herido en el terreno baldío y seguidamente uno de los oficiales fue requerido por el señor R. R. quien comunicó al oficial que su hijo estaría herido allí. De modo que se procedió a verificar el interior del terreno en compañía de R.R., siendo éste quien localizó al joven confirmando que era su hijo (al lado del cual se encontró una sogá tipo alpinista). Inmediatamente llamaron a una ambulancia y el joven fue trasladado al Hospital de Emergencias, donde fallece unas horas después. Con posterioridad, la policía efectuó “un nuevo rastillaje en el terreno baldío, lugar este donde se encontraba el masculino herido, en procura de algún otro elemento útil para la causa, arrojando como

¹⁵ Los turnos policiales se dividen en tercios de ocho horas. El jefe de tercio está a cargo de todas las unidades móviles que patrullan la ciudad durante ese período de tiempo.

resultado el secuestro de un arma de fuego tipo revólver”. Por último, el personal de la comisaría a cargo procedió al secuestro de la sogá, el revólver y las armas de los policías para realizar pericias. Con esta medida, termina el “acta policial” del procedimiento firmada por el comisario a cargo de la comisaría de la zona.

Tomando en consideración las “actas” y los “partes” de estos tres casos nos preguntamos: ¿Qué elementos aparecen como inherentes a la construcción de una versión de los hechos propia de la policía?

En primer lugar, las versiones que aparecen en ambos documentos policiales -“acta” y “parte”- son construidas de acuerdo a un formalismo o “deber ser” de la actuación policial, razón por la cual el mismo contiene y respeta todos los protocolos de actuación. Ello se expresa, como vimos a partir de los casos analizados, en afirmaciones como “dar la voz de alto” o en tecnicismos tales como “repeler la agresión”.

La siempre presente secuencia del accionar policial parte de la “voz de alto”, continúa entonces con una agresión del “delincuente” que esgrime su arma de fuego y efectúa disparos contra el personal policial -donde significativamente muchas de esas veces falla o incluso no se efectivizan los disparos- y finaliza con el acto de “repeler la agresión” por parte del personal policial; lo que termina con la muerte del supuesto agresor.

Podríamos afirmar que esta escenificación que aparece de forma recurrente en las versiones policiales expresa un modo estandarizado de construcción del “acta de procedimiento” y del “parte preventivo”. El mismo es construido a partir de una secuencia que presenta los momentos de un supuesto “enfrentamiento” y que culmina indefectiblemente en la construcción de una versión de la “legítima defensa”, más allá de las características particulares de cada uno de los hechos. La forma idéntica de ambos documentos obedece a que, tal como fue observado durante el trabajo de campo en comisarías, el “acta de procedimiento” es elaborada, frecuentemente en el mismo momento que el “parte preventivo”; es decir en el propio ámbito de la dependencia policial. En situaciones de campo tuvimos la oportunidad de observar cómo ante determinados hechos -desde accidentes de tránsito, detenciones, extravío de personas e incluso enfrentamientos- el personal involucrado se reúne en la comisaría, aunque no necesariamente cumpla funciones allí, y pasan largo tiempo consensuando y elaborando el “acta” junto con los sumariantes encargados de redactar el “parte” para notificar al juzgado.

Esta forma de construcción de la versión policial representa, desde un primer momento, una versión consensuada en sede policial tanto por los miembros de la comisaría como de los diferentes cuerpos de seguridad (Comando Radioeléctrico, Patrulla Urbana, Infantería). El consenso entre los diferentes

agentes posibilita que la versión presentada tanto en el “acta” como en el “parte” lleguen a sede judicial como una versión conjunta y única sobre los hechos.

Al mismo tiempo, su lógica de construcción se estructura en la cotidianeidad de la práctica, tanto en la comisaría como en “cuerpos”¹⁶, a partir de las relaciones cotidianas y de reciprocidad que se establecen entre los miembros de las diferentes agencias policiales. En este sentido, podría afirmarse que, tanto como otros casos considerados de menor o mayor relevancia, los casos de violencia policial se inscriben dentro de una trama rutinizada de prácticas antes que en situaciones de excepcionalidad, como suelen publicitarse estos hechos.

Podría hablarse entonces de una puesta en acto de lo que Kant de Lima ha denominado como *ética policial*¹⁷. Esta se concibe como un conjunto especial de prácticas, reglas y categorías que permite una interpretación particular de la ley, lo que conlleva una aplicación acorde con dicha interpretación. De allí que el autor argumentará que la ética policial suele oponerse a la ética judicial ya que muchas de las veces no pretenderá hallar “*la verdad de los hechos*” sino formular una versión de los mismos que pueda beneficiar (o no) a alguno de los involucrados¹⁸.

En este sentido, consideramos que esta primera versión elaborada por la policía obedece a una lectura institucional de los hechos, en tanto obedece al marco de concepciones, significaciones y prácticas habituales del accionar policial que informan a los policías cómo actuar ante una determinada realidad.

Parafraseando a Sofía Tiscornia¹⁹ podríamos decir que en ese vínculo establecido entre el personal de comisaría y los miembros del Comando, asistimos a un centro opaco a la mirada que fundamenta y legitima (y canaliza) determinados procedimientos y prácticas policiales. Podríamos afirmar, entonces, que existe una convergencia en la fundamentación que orienta el modo en que se debe construir esta primera versión policial.

Sin embargo, esta primera versión en cada uno de los casos puede no tener un desarrollo lineal cuando ingresa al mundo judicial y en este artículo, tal como señalamos en un inicio, intentaremos esbozar una hipótesis que busque explicar los motivos. Con ello queremos señalar que esta versión, que generalmente es mantenida por los funcionarios policiales implicados²⁰ ratificando lo expuesto en

¹⁶ Agrupación que nuclea las dependencias de Comando Radioeléctrico, Patrulla Motorizada, Urbana y Guardia de Infantería. Las mismas se ocupan de las tareas de índole operativa en la vía pública.

¹⁷ KANT DE LIMA, Roberto (1995) *A policía da cidade do Rio de Janeiro. Seus dilemas e paradoxos*. Ed. Forense. Río de Janeiro.

¹⁸ Particularmente en el capítulo VII relata y analiza el ‘armado’ de un caso a partir de un accidente de tránsito.

¹⁹ TISCORNIA, Sofía (2004) “Entre el imperio del ‘Estado de policía’ y los límites del derecho. Seguridad ciudadana y policía en Argentina”, *Rev. Nueva Sociedad* 191: 78-89.

²⁰ En la provincia de Santa Fe la sección de criminología del CEIDH (Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos) trabajó principalmente con casos ocurridos en la ciudad de Rosario. Los resultados de sus investigaciones (PID UNR: “Violencia Policial Análisis desde una perspectiva realista. Investigación cualitativa sobre los casos de civiles muertos

el “acta” cada vez que son citados a declarar, no siempre es respaldada judicialmente. Veamos esto en cada uno de los casos.

¿Qué pasó en Tribunales? La versión policial en la instancia judicial

En el primer caso, donde es abatido el “delincuente” en los pasillos del asentamiento precario, inmediatamente se puso en conocimiento del hecho tanto al Juez de Instrucción como al Fiscal de turno. El juez se presentó en el lugar de los hechos e interiorizado de los pormenores ordenó que se le efectúen pericias al arma utilizada por el policía implicado y que la misma le fuera reintegrada de inmediato, clasificando el hecho como “resistencia a la autoridad y homicidio”.

La “inspección ocular”²¹, elaborada por el mismo sumariante y el subcomisario que habían realizado el “parte preventivo”, ratificó lo expuesto en el “acta de procedimiento”. Lo que en principio era una versión comienza, de ese modo, a objetivarse como una verdad.

La convergencia en las versiones plasmadas en todos los documentos elaborados en sede policial se vio reforzada en este caso, ya que la investigación judicial se asentó sobre las declaraciones tomadas a testigos en la comisaría: la mujer víctima de la primera agresión, el hombre víctima de la segunda agresión y el policía que participó del “enfrentamiento”, quien confirmó lo expuesto en el “acta” resaltando algunos elementos como “le doy la voz de alto, hacen caso omiso...” o “me efectúan varios disparos y repelo la agresión contra estos últimos con dos disparos más, los que también fueron efectuados en forma baja”. Los otros policías que participaron del procedimiento también ratificaron lo expuesto por el oficial.

Hasta aquí podríamos decir que estamos frente a un hecho policial que sigue una narrativa lineal, pero ¿qué ocurre? La hermana del “delincuente” muerto se presentó a declarar en tribunales, siendo al mismo tiempo hermana de la víctima de la primera agresión. De acuerdo a su testimonio, ella acompañó a su hermana hasta el hospital porque había sido víctima de la agresión de dos personas,

por violencia policial registrados en la ciudad de Rosario en el período 12-95 a 12-99”) permitieron identificar patrones recurrentes en la práctica policial: la construcción de una versión falsa de los acontecimientos, el ocultamiento, destrucción o fabricación de pruebas para desvincular a los policías involucrados y el amedrentamiento a testigos y familiares. Con respecto a las prácticas judiciales: la primera es la inadecuada o absoluta falta de investigación de las evidencias que incriminan a los policías involucrados: los magistrados no se apersonan en el lugar ni ordenan la realización de pericias autónomas, la reconstrucción de los hechos ni promueven la presentación de testigos. Otra práctica habitual es la falta de investigación de los presuntos delitos o irregularidades que aparecen como cometidas para encubrir las presuntas ejecuciones. A ello se suma, la interpretación jurídica particular de las normas que regulan la función policial y la legítima defensa donde los policías aparecen en una posición de privilegio en comparación con los civiles respecto a los requisitos de la legítima defensa, donde en el cumplimiento de su deber la protección de la vida tiene un valor inferior al de la “represión del delito”.

²¹ Procedimiento contemplado en el código procesal penal como parte de la investigación sumaria y como medio de prueba a fin de lograr una observación detallada del lugar de los hechos que permita así establecer el modo en que sucedió el “delito”. Generalmente es realizada por el agente policial, aunque también se contempla que la realice el juez ó algún perito designado por éste. Suelen asimismo intervenir otros especialistas tales como médicos legistas, peritos en balística, fotógrafos, etc., con el objeto de recabar huellas y objetos que puedan convertirse en pruebas para la investigación.

hecho que denunciaron ante un móvil del Comando. Ahora, también avisó a su hermano, el que fue hasta su casa a “ver qué estaba pasando” pero nunca habría llegado a destino. Con posterioridad, de acuerdo a sus dichos, se encontraron con el cuerpo de su hermano tirado en el piso del pasillo.

Tal como consta en el “expediente”, el arma que al parecer poseía el supuesto “delincuente” es peritada y se confirma “la existencia de restos de pólvora deflagrada”²² aunque no se pudo determinar la fecha; es decir, no se pudo certificar el momento en que fue disparada.

A los 8 días -y dentro de los plazos legales previstos- el sumariante elevó al juzgado el sumario completo. Una vez que el sumario se encuentra en sede judicial, el juzgado interviniente empieza a tomar las declaraciones testimoniales. Las versiones continuaron enmarañándose en la sede judicial: la madre del supuesto delincuente muerto afirmó que había escuchado tres tiros solamente y que los tres parecían provenir de una misma arma; resaltando además que su hijo no podía correr ya que tenía afectada una pierna. Otra vecina reafirmó la versión de que fueron solo tres disparos, uno detrás de otro “y de un arma grande”, además que “lo que le llamó la atención es que no escuchó ninguna voz diciendo ‘alto policía’ o algo así”. Todo se complejizó aún más cuando esta vecina que tenía el arma en su patio y que según lo expresado por la policía, los había llamado para indicarles esta situación, declara que “cuando estaba golpeando la puerta la policía, que estaba afuera del patio de la casa de su amiga, le dijo que había un arma tirada detrás de ella. Quiere aclarar que ella en ningún momento antes de que la policía le dijera eso la había visto”. Otra vecina, asimismo, afirmó que escuchó los tres disparos y que -contrastando la versión policial que indicaba hostilidad de los vecinos a participar como testigos- cuando quiso salir a ver qué pasaba, la misma policía le impedía el paso.

Ahora, si bien la versión inicial del policía implicado contradecía claramente estas otras versiones, la misma fue mantenida íntegramente por él cuando fue citado a declarar en sede judicial. Ante el nuevo escenario de declaraciones, la primera versión fue igualmente sostenida.

Hasta este momento la fiscal no había intervenido en el caso, permitiendo que la investigación fuera realizada exclusivamente por la policía. En su primera acción judicial solicitó que se determine la distancia y trayectoria del disparo, tras lo cual los peritos informaron que la bala que había impactado en el cráneo del joven había modificado su trayectoria inicial (impactando previamente en el piso) antes que ocurra este hecho por efecto del rebote.

Esta posición de la fiscal en el caso posibilitó que se construyera una versión acorde a los relatos de los policías, lo cual fue resaltado y ratificado por el juez en su sentencia, organizando una versión más sólida y consistente para la lógica judicial.

²² Expresión técnica proveniente de la balística que indica la presencia de residuos de pólvora producidos por la detonación de una bala. En otras palabras, la existencia de estos restos indica que el arma fue utilizada.

Con estos elementos, unos días antes que se cumpla un año del hecho, el juez dictó la sentencia que, asumiendo el relato y la secuencia de los hechos tal cual figuran en el “acta de procedimiento” y “parte preventivo” y sin considerar las otras versiones, estipuló que: “se presenta como evidente que el obrar del policía fue consecuencia inmediata y directa de un accionar armado, peligroso e ilegítimo de X (la víctima fatal) y de sus acompañantes, y que empleó para hacer cesar el ataque, el arma de servicio que portaba (...) luciendo por lo demás racional el medio empleado, toda vez que respondió el injusto ataque con armas de fuego de los tres desconocidos, usando la pistola reglamentaria que portaba, la que además disparó en forma disuasoria”.

A partir de este argumento, dictó el sobreseimiento definitivo del policía implicado. Es decir, desvinculó al oficial de cualquier responsabilidad penal sobre lo ocurrido. De este modo y a pesar de la aparición de distintas versiones, la versión policial fue validada judicialmente.

En el segundo caso, donde son “abatidos dos delincuentes” que se trasladaban en una moto, la causa fue clasificada en sede judicial como “resistencia a la autoridad calificada, seguida de muertes y lesiones graves”.

Las primeras declaraciones, al igual que en el caso anterior, se habían realizado en sede policial. Allí declaró tanto la persona que había manifestado estar herida a raíz de haber sido agredida por los tres hombres que se trasladaban en moto como un vecino que afirma haber visto el intercambio de disparos entre los que se trasladaban en la moto y los miembros del Comando. Como hecho destacable y recurrente, las declaraciones de los policías ratificaron en su totalidad lo expuesto en el “acta de procedimiento”, mostrando un “fuerte corporativismo policial” cuyos límites observa Eilbaum²³ analizando las prácticas de investigación y producción de pruebas en la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo sucedió en sede judicial, donde todos los policías vuelven a corroborar su declaración.

A diferencia del primer caso, la investigación sigue un curso lineal, en tanto no aparecen voces que cuestionen la versión construida por la policía. Luego de considerar las pericias técnicas a las armas de los funcionarios y los informes médicos ante posibles grados de alcoholización -ambas elevadas dos meses y medio después de acontecido el hecho- el juez resolvió que: “[respecto] al procedimiento policial no se observa motivo alguno que imponga proseguir con las actuaciones, toda vez que surge que ha habido un enfrentamiento con personas armadas, resultando coherentes los relatos policiales (habiendo personal herido de consideración) y habiendo sido corroborados por los efectuados por los particulares tanto en sede policial como judicial”.

²³ EILBAUM, Lucía (2009) “De prácticas de investigación y producción de pruebas. Haciendo y deshaciendo versiones, en la policía de la provincia de Buenos Aires”. Ponencia presentada en la Reunión de Antropología del Mercosur, Universidad de San Martín, Bs. As, (mimeo)

Así fue que, a pesar de los 16 impactos de bala en el cuerpo del “delincuente”, se archivó rápidamente la causa respecto de las actuaciones del personal policial.

En el tercer caso, así como en los dos anteriores, la primera clasificación penal del acontecimiento se realizó con base en la acusación de los jóvenes muertos y la supuesta inocencia de la policía.

Así, la primera carátula consideraba como acusado al joven tendido en el baldío, bajo el delito de “resistencia a la autoridad seguida de muerte e intento de robo calificado”.

El juez a cargo de la investigación, avanzó sobre la causa basándose siempre en la investigación policial previa. Tomó declaración como testigos del hecho al vecino que había activado la alarma, a dos personas que se encontraban en el terreno baldío y a una vecina del barrio. También fueron escuchados los relatos del padre y la abuela del joven y de un amigo que se encontraba esa noche con él. Sin embargo, los datos aportados por ellos cuestionando el “acta policial” no fueron investigados por el juez.

A su vez, tanto el fiscal como el abogado de la familia del joven pidieron que se indagara a los policías responsables del operativo y que se realizara la reconstrucción del hecho; solicitud que el juez no consideró pertinente para esclarecer lo ocurrido. Esto y cada una de las medidas solicitadas por ellos fueron rechazadas por el magistrado.

De este modo, casi un año después de la muerte del joven, se dictó sentencia sin interrogar al policía considerando que los elementos en la causa no eran suficientes ni para llamarlo a declarar ni para considerarlo responsable de lo ocurrido.

Tanto el fiscal como el abogado de la familia del joven apelaron la resolución judicial y la Cámara de Apelaciones le indicó al juez que debía investigar el caso con mayor profundidad. Éste argumentó que ya había investigado todo lo que se tenía que investigar y sus superiores derivaron el caso a otro juzgado. Aquí la investigación judicial tomó otro rumbo. Frente a ello nos preguntamos ¿cómo es posible explicar estas derivaciones judiciales diferenciales?

Cuestionando la versión policial: la acción de los familiares de las víctimas

Hasta que el tercer caso comenzó a ser investigado en un segundo juzgado de instrucción, la investigación judicial siguió el mismo curso que en los dos casos anteriores. Sin embargo, no sólo el traslado de juzgado explica este cambio de rumbo sino también una característica distintiva del tercer caso, que lo diferencia sustancialmente de los otros dos, que consiste en el seguimiento continuo de los familiares en la investigación judicial.

Desde que el tercer caso llega a tribunales, sus familiares se constituyeron como “actores civiles” con el objetivo de acceder al expediente y poder conocer qué medidas judiciales se estaban realizando²⁴.

Además, si bien hasta ese momento la posibilidad de participación de la víctima en el Código de Procedimiento Penal de Santa Fe, era casi nula, los familiares utilizaron diferentes estrategias tanto al interior de los tribunales como en las calles de la ciudad que fueron posibilitando su reconocimiento como “actores legítimos” por los funcionarios judiciales²⁵.

Durante el transcurso de la investigación judicial, éstos realizaron marchas; actos públicos; se contactaron con funcionarios del gobierno provincial y nacional; instalaron una carpa blanca frente al edificio de Tribunales para exigir ser recibidos por el juez de la causa y se acercaron permanentemente a la mesa de entradas del juzgado solicitando información sobre el curso de la investigación.

Para ese momento, los familiares de este caso se habían reunido con otros familiares de víctimas de “violencia policial” y de “delincuencia común” formando una organización social llamada “Padres del Dolor”. A partir de la construcción de una red de relaciones con otras organizaciones sociales, con organizaciones políticas, con funcionarios públicos y periodistas de los medios locales y de una serie de estrategias realizadas en el espacio público – marchas, escraches, actos- los Padres del Dolor adquirieron una importante legitimidad. Así, en respuesta a la demanda de un avance en los casos mientras estaban frente al tribunal, los altos mandos de la jerarquía judicial ordenaron a sus subordinados que recibieran a los familiares y avanzaran en esos casos en particular con el objetivo de que retiraran la carpa y con ello las amenazas a su propio prestigio.

En el caso aquí analizado, ello resultó en la orden de la Cámara de que el caso fuera nuevamente investigado, considerando que no se había realizado una investigación judicial en profundidad.

Como resultado, a diferencia de los primeros dos casos analizados, el segundo juez a cargo de la causa, en primer lugar cuestionó la versión policial y modificó el curso de la investigación tomando como víctima al joven y como acusado al policía.

Así la figura jurídica de la “legítima defensa” se reconfigura en la de “homicidio”. El supuesto delincuente agresor que en un primer momento era investigado ya sea por robo o resistencia a la autoridad, es ahora calificado como víctima de homicidio.

El juez en cuestión investigó en profundidad lo sucedido, indagó al policía; ordenó la reconstrucción del hecho y, finalmente procesó al policía que había disparado. Ese mes, el cartel que anunciaba la marcha numero 20 realizada por los familiares rezaba: “En 66 días el Dr. J [segundo juez] investigó, en

²⁴ Recordemos que en el procedimiento penal vigente en ese momento en la Provincia de Santa Fe, de cuño fuertemente inquisitorial –el que actualmente está siendo sustituido por un procedimiento en el cual se incluye el juicio oral- el proceso representa una suma de pasos, cuya etapa central es el sumario escrito y secreto, tendiente a confirmar la hipótesis de la responsabilidad penal original del acusado, siendo lo característico de este sistema que durante el proceso no se incorpore a la víctima.

²⁵ FERNANDEZ Y PATALLO, Marta (2008) *Op. Cit.*

452 días, C [primer juez] no lo hizo”. De este modo, los familiares construyen diversas relaciones con la prensa, los organismos de Derechos Humanos así como con organizaciones políticas y sociales que trascienden la mera inscripción como víctimas o culpables en el proceso judicial e instala el caso más allá de los límites de lo juzgable, en acciones que son al mismo tiempo políticas, sociales y de reivindicación ciudadana. Así es que en la crónica de un diario local aparecieron expresiones de sus familiares tales como: “queremos que limpien el nombre de C. El no usaba armas, era un chico trabajador”²⁶, “C... había terminado la secundaria...”²⁷. En este sentido, a partir de diferentes estrategias, los familiares consiguieron construir una verdad política que está relacionada a la recuperación del lugar social de la víctima.²⁸ Con ello, la linealidad burocrática y rutinaria que marca la investigación de la gran mayoría de los casos de violencia policial, se ve alterada. La víctima pasa así a tener un nombre y la versión policial a convertirse en una versión más.

A partir de este contexto se abre un nuevo horizonte explicativo en el que emergen trayectorias judiciales diferenciales. En los dos primeros casos, donde las víctimas respondían claramente a la imagen de lo que en el mundo policial/judicial es un “delincuente” -en tanto poseían antecedentes penales además de ser jóvenes y habitantes de barrios pobres de la ciudad- y en donde sus familiares no consiguieron, aún por fuera del ámbito judicial, ‘perforar’ la versión policial, la investigación se orientó claramente a la ratificación de la versión inicial dada por la policía. De manera inversa, en el tercer caso, donde la familia de la víctima sí logra trazar relaciones sociales que problematizan el accionar de la policía, se produce un rompimiento de la lógica que estructura las investigaciones, que ya no se orienta hacia una ratificación o naturalización de la versión policial, sino que se ve obligada a contrastar la misma con la aparición de nuevos actores, testigos, peritos, etc., que en los otros casos no aparecen.

Palabras Finales

A modo de reflexión final, cabe destacar que esta nueva configuración de relaciones sociales promovida por los familiares va construyendo un escenario que incide sobre el accionar de los jueces. Los familiares a partir de la utilización de diferentes estrategias (marchas, actos públicos, presencia en tribunales) se constituyen en actores legítimos ante los jueces, los cuales toman decisiones, realizan determinadas medidas y, finalmente, investigan el caso de un modo diferente a aquel acostumbrado, lo

²⁶ Diario La Capital de la ciudad de Rosario, 11/08/02.

²⁷ *Ibid.* 11/08/02.

²⁸ Esto resulta interesante porque si bien re-instala la figura de la víctima, también reproduce las valoraciones policiales/judiciales/sociales en torno al tratamiento del *delincuente*. En este sentido lo hegemónico del discurso de la seguridad opera también en familiares de víctimas del *gatillo fácil*. Ver: CALZADO, Mercedes (s/f.) “Elementos para el análisis del tratamiento mediático del caso Blumberg”, *Documento de Trabajo* N° 5, Programa de Antropología Social y Política. Flacso

cual puede llegar a desarmar la versión policial, habilitando posibilidades de construcción de otras diferentes. En este tercer caso, logra imponerse una versión en la cual se fundamenta que el policía disparó a un joven desarmado y que por lo tanto no existió ningún tipo de “enfrentamiento”.

No obstante, ello no implica inferir una nueva orientación en el Poder Judicial (lo cual queda evidenciado en el hecho de que los casos que analizamos son contemporáneos entre sí) pero sí puede implicar distintas resoluciones para casos particulares a partir de un nuevo elemento: la aparición de los familiares como un actor visible del proceso.

En este sentido, entendemos que cabe destacar la perspectiva etnográfica que, a partir del análisis de casos, aparece como una mirada que puede permitir observar formas particulares de articulaciones sociales y de ese modo constituir una base desde donde concebir al campo del derecho y de la administración de justicia, como un campo de fuerzas y un objeto de disputa al mismo tiempo.